



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR. SALA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
*"Al servicio de la justicia
y de la paz social"*

A - 048

Procedimiento: Ejecutivo

Demandante: Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.

Demandado: Inmobiliaria Agilsa S.A. y otros

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 012 2011 00593 01

Decisión: Confirma

Tema: Desistimiento tácito (art. 317-2 CGP)

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Procede la suscrita magistrada a resolver el recurso de apelación concedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín contra el auto de fecha 14 de noviembre de 2023 proferido en el proceso ejecutivo de la referencia.

ANTECEDENTES

Por auto emitido el 14 de noviembre de 2023, el señor Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, oficiosamente declaró terminado el proceso por desistimiento tácito tras advertir que en efecto se encuentra inactivo desde el 3 de septiembre de 2021 sin que la parte demandante haya promovido actuación alguna de impulso, resaltando que se cuenta con orden de seguir adelante la ejecución desde el 15 de marzo de 2012.

Contra la anterior decisión, oportunamente interpuso el apoderado de la ejecutante los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, aduciendo desvirtuar el desinterés en el proceso con la presentación, al tiempo de la impugnación, de la liquidación del crédito. De otro lado, reseñó la providencia STC1191-2020 de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, respecto de la unificación de las *"reglas jurisprudenciales de interpretación"* del desistimiento tácito en procesos ejecutivos, para lo cual citó el apartado

donde la Corte se encargó de analizar las actuaciones aptas y apropiadas para impulsar el proceso. Argumentó que desde el año 2012 se han presentado liquidaciones actualizadas para la continuación del compulsivo en tanto que no existen medidas efectivas ni bienes para rematar y garantizar el pago de las obligaciones; que, como se ordenó seguir con la ejecución en contra del demandado moroso, terminar el proceso sería dejar desprotegido al demandante quien accedió a la administración de justicia hasta la satisfacción de los créditos pretendidos.

Pidió dar prelación al derecho sustancial sobre cualquier formalidad a fin de proteger el derecho del demandante ya constituido, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Además, sostuvo que jurisprudencialmente se ha aceptado que no hay lugar a aplicar el desistimiento tácito cuando en el término de ejecutoria del auto que lo decreta, la parte afectada cumple la carga procesal o ejercita actuación dentro de la causa como ocurre en este caso con la presentación de la liquidación del crédito. Insistió en que existe un fundamento relevante para que el Despacho se abstenga de aplicar el desistimiento tácito como lo es la actividad del demandante, toda vez que la liquidación del crédito impulsa de manera efectiva el proceso.

Mediante auto de 11 de diciembre de 2023 el señor juez *a-quo* despachó negativamente el recurso horizontal, argumentando la propia literalidad del artículo 317 del CGP, así como la inactividad en la que se encontró el proceso entre el 3 de septiembre de 2021 y el 14 de noviembre de 2023 cuando se decretó la terminación por desistimiento tácito; por lo que concedió la apelación interpuesta en subsidio, que se procede a resolver.

CONSIDERACIONES

El desistimiento tácito es una forma de terminación anormal del proceso que puede presentarse, de acuerdo con su nueva regulación, bien por el incumplimiento de una carga procesal dentro del término establecido en el auto mediante el cual se requirió a la parte para dicho fin, ora por la inactividad del proceso por un término superior a uno o dos años, según que el mismo cuente o no con sentencia o auto de seguir adelante la ejecución.

Sobre su propósito teleológico, la Corte Constitucional ha señalado que dicha figura *“busca garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente (art. 229); el derecho al debido proceso, entendido como la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia (art.29,C.P.); la certeza jurídica; la descongestión y racionalización del trabajo judicial; y la solución oportuna de los conflictos”*.¹

La figura jurídica del desistimiento tácito halla soporte en el artículo 317 del Código General del Proceso, que señala su aplicación, entre otros, al evento en que

“2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

(...) b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”.

Refiriéndose a la pretérita figura de la perención, equivalente a la que ahora se conoce como desistimiento tácito, esto dijo la Corte Constitucional en sentencia T-581 de 2011:

“En el mismo sentido, la Corte Constitucional al determinar la exequibilidad del artículo 23 del proyecto de Ley 1285 de 2009², resaltó *que el restablecimiento de la perención en los procesos ejecutivos, como medida derivada de la injustificada inactividad de la parte actora, constituye un mecanismo idóneo y constitucionalmente admisible para contribuir eficazmente a la descongestión del aparato judicial, dentro del margen de configuración propio del Legislador”*.

A su turno, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC 11191-2020, expresó:

“Así se desprende de la historia legislativa de la «figura», la cual revela que desde 1890 hasta ahora, salvo durante el periodo comprendido entre 2003 y

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-1186 de 2008.

² Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2008, M.P.

2008, el legislador colombiano ha encontrado en la «terminación anticipada de los procesos» un «mecanismo efectivo» para remediar su «parálisis y sus efectos, al punto que, con el paso de los años, lo ha fortalecido, ampliando las condiciones en que puede ser aplicado; de operar solo a petición de parte, se autorizó su declaración de oficio, y de interesarle el sujeto responsable de la detención del procedimiento, dispuso que no solo procede cuando el impulso depende una de las partes (num. 1º art. 317 del C. G. del P), sino, cuando, por cualquier razón, el «expediente permanezca inactivo» (num. 2 ibídem)».

(...) Por otra parte, la Corte Constitucional, en las oportunidades que ha estudiado la «figura», como «perención» o «desistimiento tácito», ha reiterado que realiza los «principios de diligencia, eficacia, celeridad, eficiencia de la administración de justicia», al igual que la seguridad jurídica, [t]odo esto en el entendido de que la racionalización del trabajo judicial y la descongestión del aparato jurisdiccional, finalidades a las que aporta la decisión de terminar anticipadamente un trámite judicial, contribuyen significativamente a hacer más expedito el trámite de los litigios judiciales (C-173/2019, C/1186-08, C/874-03, C/292-2002, C/1104-2001, C/918-01, C/568-2000)».

A la luz de las anteriores citas jurisprudenciales se hace evidente que la figura del desistimiento tácito opera plenamente incluso en los procesos ejecutivos que cuenten con sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución, como ha sido avalado por los máximos tribunales de cierre tanto de la jurisdicción constitucional como de la ordinaria, pues se trata de una consecuencia de orden legal consagrada por el estatuto adjetivo, por lo cual no hay lugar a predicar un sacrificio del derecho sustancial *"sobre cualquier formalidad"* como lo sugiere el recurrente.

En el *sub judice* de entrada se advierte, entonces, el naufragio del recurso planteado, pues el numeral segundo del artículo 317 CGP, que fue la causal invocada por el *a quo* para dar por terminado el proceso por desistimiento tácito, no entra a realizar consideraciones subjetivas en torno a las causas por las cuales se produjo la inactividad del proceso. Aquella simplemente establece un término fatal y perentorio de dos años -cuando se ha dictado sentencia ejecutoriada a favor del demandante-, sin que en dicho interregno se hubiese realizado *"ninguna actuación"*.

En tales condiciones, habiéndose proferido auto que ordenó seguir adelante la ejecución desde el 15 de marzo de 2012, y permaneciendo el proceso inactivo desde el 3 de septiembre de 2021, para el momento en que el juzgado

de conocimiento declaró de oficio la terminación del proceso por desistimiento tácito, se habían cumplido en exceso todas las condiciones en orden a ello.

El censor argumenta que la liquidación del crédito corresponde al tipo de actuaciones con la virtualidad de impulsar el proceso y que, como dentro del término de ejecutoria del auto impugnado la alegó, el término de inactividad habría de interrumpirse. Al efecto, el literal *c* del numeral segundo del artículo 317 *ibídem* claramente señala que "*[c]ualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo*". Si de interrupción se trata, quiere ello decir que el término concedido está corriendo o aún no ha fenecido o no se ha cumplido. Por simple lógica entonces, si se encontraban cumplidos -de lejos- los dos años de inactividad exigidos por la ley para que haya lugar a la consecuencia del desistimiento tácito, impertinente sería dar cabida a la interrupción que alega la parte ejecutante.

No se discute que la liquidación del crédito está llamada a actualizar el monto de la obligación y, por tanto, tiene la vocación de impulsar el trámite; pero para interrumpir el término de inactividad es necesario que se allegue al trámite mientras el término, en este caso de dos años, no se haya cumplido.

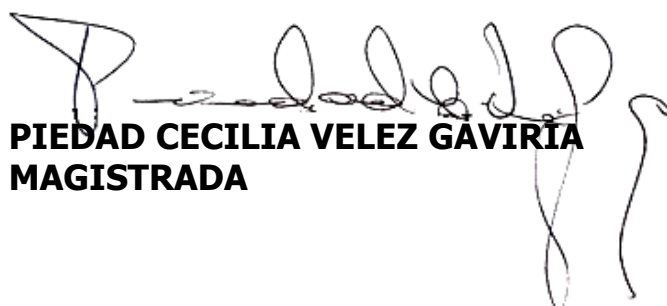
Lo anterior resulta suficiente para concluir que el proveído combatido debe mantenerse, pues la sentencia ejecutoriada o auto que disponga seguir adelante la ejecución, ni pone fin al proceso ejecutivo –que normalmente termina con el pago-, ni es óbice para declarar el desistimiento tácito cuando se den los supuestos de ley, y es por ello que la suscrita magistrada,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicadas.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia al no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE


PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:
Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8ba29f2ede4a340a32108a5d9f3cfe21437a7f5670398ee2c7a6a156c5177ecd**

Documento generado en 07/05/2024 05:21:05 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>